

ALBERTO CARDENAS D. -*ABOGADOS-*
Especialistas en Derecho Laboral y
Seguridad Social Integral

Av. Calle 19 No 3 – 50 Oficina 2202 Edificio Barichara Tel. 3375605 / 3520788 – Bogotá D.C.

SANCION MORATORIA- CESANTIAS

Señor
JUEZ ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BUGA. (REPARTO)
E. S. D.

MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.

Demandante: LUCÍA GUZMÁN SILVA C.C. 31192548

Demandado: LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL- FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TULUA Y FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

Acto Administrativo que reconoció Cesantías: 310-054-581 DEL 31 DE AGOSTO DE 2011

Fecha de Pago de las Cesantías: 28 DE NOVIEMBRE DE 2011

Petición Sanción moratoria: 18 DE MARZO DE 2013

Acto a demandar: ACTO FICTO DEL 18 DE JUNIO DE 2013

ALBERTO CÁRDENAS D., mayor de edad, residenciado y domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado civilmente con la cédula de ciudadanía número **11.299.893** de Girardot, y profesionalmente con Tarjeta No. **50.746** del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en nombre y representación del poderdante que consagra la referencia, de las condiciones civiles expresadas en el poder legalmente otorgado para el efecto, , a ustedes con todo respeto me permito manifestar que formulo demanda contra **LA NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TULUA**, representada legalmente por el señor Ministro(a) de Educación Nacional o por quien haga sus veces, o por el apoderado especial que para el efecto se designe, **Y LA FIDUCIARIA LE PREVISORA S.A.** Sociedad de Economía Mixta de carácter indirecto y del orden nacional, sometida al régimen de Empresa Industrial y Comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y con control fiscal reglamentado por la Contraloría General de la República y con notificación y anuencia del Ministerio Público, en ejercicio del MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, de que tratan los artículos 137 y 138 de la ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en sentencia definitiva se pronuncie favorablemente sobre las siguientes:

DECLARACIONES Y CONDENAS

PRIMERO.- Se declare la **NULIDAD ABSOLUTA del ACTO FICTO DEL 18 DE JUNIO DE 2013**, proferido por el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES DEL MAGISTERIO- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TULUA, respecto a la petición radicada el día **18 DE MARZO DE 2013** del cual se infiere la negación en el reconocimiento y pago de la sanción moratoria del pago de las cesantías de mi poderdante.

SEGUNDO.- Como consecuencia de esta declaración Condenar a la **NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TULUA Y FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.** a reconocer y pagar la Sanción Moratoria, a que haya lugar, debido al no pago oportuno de la cesantía PARCIAL ordenada a favor de mi representada, mediante la Resolución No. 310-054-581 DEL 31 DE AGOSTO DE 2011, proferida por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TULUA.

TERCERO. Que como consecuencia de la declaración de nulidad se ordene a las demandadas, como restablecimiento del derecho, el pago de la indemnización moratoria en el pago de su cesantía PARCIAL, la cual deberá ser liquidada desde el 28 DE JULIO DE 2011 (fecha en que empezó a causarse) y hasta el día 28 DE NOVIEMBRE DE 2011 (fecha efectiva del pago), a raíz de un (1) día de salario por cada día de retardo, tomando como base el salario acreditado en el momento de su pago, de conformidad con la ley 1071 de 2006, ley 91 de 1989 y demás normas concordantes y reglamentarias.

CUARTO. CONDENAR a las entidades demandadas a efectuar sobre las sumas canceladas mediante la resolución No. 310-054-581 DEL 31 DE AGOSTO DE 2011, que reconoció el pago de la cesantía PARCIAL, se le reconozcan, liquiden y paguen los reajustes de ley.



Av. Calle 19 No 3 – 50 Oficina 2202 Edificio Barichara Tel. 3375605 / 3520788 – Bogotá D.C.

SANCION MORATORIA- CESANTIAS

QUINTO. CONDENAR a las demandadas al pago de la INDEXACIÓN, desde el 28 DE JULIO DE 2011 (fecha en que empezó a causarse) y hasta el 28 DE NOVIEMBRE DE 2011 (fecha efectiva del pago), aplicando para tal fin, la variación del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE, conforme a la Jurisprudencia Vigente.

SEXTO. CONDENAR a la demandada a que si no da cumplimiento al fallo dentro del término previsto en el artículo 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pague los intereses establecidos para tal fin.

SEPTIMO. Que se condene a la parte demandada al cumplimiento del fallo que como resultado se profiera en el presente proceso, de acuerdo con los Arts. 192,193 Y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

OCTAVO. Que se condene a la parte demandada en costas y gastos del proceso en los términos del Art. 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

HECHOS

PRIMERO.- Mi poderdante LUCÍA GUZMÁN SILVA, identificado/a con cedula de ciudadanía N° 31192548, laboró como docente para SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TULUA.

SEGUNDO.- Mediante solicitud presentada el día 05 DE MAYO DE 2011 bajo el radicado N° 2011-CES-013556 ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TULUA, mi poderdante solicitó el reconocimiento y pago de cesantías PARCIAL.

TERCERO.- La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TULUA, profiere la Resolución No. 310-054-581 DEL 31 DE AGOSTO DE 2011, por medio de la cual reconoció y ordenó el pago de una cesantía PARCIAL por la suma de \$ (\$24.141.348) VEINTICUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS.

CUARTO.- Según la resolución de reconocimiento No. 310-054-581 DEL 31 DE AGOSTO DE 2011, le sirvieron para la liquidación de su cesantía, los siguientes factores:

a.- Salario Base de Liquidación	\$ 2873978
b.- Valor Diario	\$ 95799

QUINTO: El pago de la indicada prestación, solo se realizó hasta el día 28 DE NOVIEMBRE DE 2011.

SEXTO.- El demandante LUCÍA GUZMÁN SILVA, me ha conferido poder para actuar.

SEPTIMO- Una vez otorgado el poder, radique la solicitud de reconocimiento y pago de sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías PARCIALES ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TULUA el día 18 DE MARZO DE 2013.

OCTAVO.- Dicha entidad con su actuación configura **ACTO FICTO DEL 18 DE JUNIO DE 2013**, con el cual se infiere la negativa respecto al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el retardo en el pago de las cesantías PARCIALES reconocidas mediante la Resolución No. 310-054-581 DEL 31 DE AGOSTO DE 2011.

NOVENO- En cumplimiento a lo ordenado por el **art. 13 de la ley 1285 de 2009**, y su **Decreto reglamentario N°. 1716 de mayo 14 de 2009**, se adelantó solicitud de conciliación extrajudicial, correspondiéndole la misma al Despacho del 60 JUDICIAL I del Ministerio Publico quien expidió el **ACTA y CONSTANCIA DE FALLIDA**.



Se citan como transgredidos el preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 23, 25, 29, 53, 58, 90, 95, 209, 230, 315 de la Constitución Política; ley 1437 de 2011, por medio de la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en especial el artículo 102, Ley 1071 de 2006 y Ley 1285 de 2009.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

a) CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

La Nulidad de los Actos Administrativos demandados en la presente, debe ser declarada toda vez que los mismos infringen las normas en las que debían fundarse a nivel constitucional y legal así: Constitución Nacional artículos 1, 2, 4, 6, 13, 23, 25, 29, 53, 58, 90, 95, 209, 230, 315.

i. VIOLACIÓN A LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

Con la expedición de los Actos Administrativos demandados, se han dado varias transgresiones en el ámbito Constitucional. Las normas vulneradas se señalan a continuación:

i. De los derechos Fundamentales quebrantados

En el caso que nos ocupa se ha dado una clara violación a los Derechos Fundamentales a la igualdad, al debido proceso y el derecho a la seguridad Social de mi poderdante debido al actuar de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TULUA

- **Violación al Derecho Fundamental a la Igualdad:**

El art. 13 de la CN reza que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y que por tanto todos tenemos derecho a recibir el mismo trato y protección por parte de las autoridades.

La aplicación de éste derecho ha tenido varios matices e interpretaciones. Hoy por hoy lo que se tiene, gracias al desarrollo que le ha dado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es que el alcance de éste derecho supone la existencia de un trato igual –por parte de las autoridades- a personas que se encuentren en idénticas situaciones y uno desigual para quienes cuyas situaciones también lo sean.

Según el Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA¹ dentro de la protección al derecho a la igualdad debe entre otros contemplarse, esencialmente el trato que los particulares recibimos por parte de las autoridades en aplicación de la ley, sin importar por quien estén ésta autoridad representada. De allí se desprende el hecho que la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones se encuentre proscrita.

En palabras del Magistrado haciendo referencia al artículo 13 en comentario: *“el segundo elemento de la norma, prohíbe que se discrimine, esto es, que se otorguen privilegios, se niegue el acceso a un beneficio, o se restrinja el ejercicio de un derecho a un determinado individuo o grupo de personas de manera arbitraria e injustificada (...)”*.

- **Violación al derecho Fundamental al Debido Proceso:**

Según el Art. 29 de la CN en todas las actuaciones administrativas y judiciales el debido proceso debe ser aplicado. Según esto, *“Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”*. Lo que también aplica en materia administrativa (ver entre otras sentencia T-521-1992 MP Alejandro Martínez Caballero).

ii. VIOLACIÓN A LA LEY : La violación a la ley se ha dado bajo varios aspectos que se señalan a continuación:

A.- Es de anotar, que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de conformidad con la Ley 91 de 1989, es una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, con cargo al cual se pagan las prestaciones de los docentes afiliados a dicho Fondo.

¹ CEPEDA ESPINOSA, Manuel José. *Los Derechos Fundamentales en la Constitución de 1991*. 1992.



El artículo 180 de la Ley 115 de 1994, estipula que dichas prestaciones serán reconocidas por intermedio del Representante del Ministerio de Educación Nacional ante la entidad territorial a la que se encuentre vinculado el docente. Y agrega. “...*El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará, además, la firma del Coordinador Regional de prestaciones sociales...*”.

Dicho reconocimiento, se hace por intermedio del Representante Legal en cada Entidad Territorial, y ahora, de la Secretaría de Educación de cada Entidad Territorial Certificada, conforme a la Ley 962 de 2005, art. 56 y los Decretos 1775 de 1990 y 2831 del 16 de agosto de 2005.

B.- Frente al reconocimiento de indexación moratoria, por el pago tardío de las cesantías, la Corte Constitucional se pronunció al respecto, manifestando:

“La Corte Constitucional, en Sentencia T-418 del 9 de septiembre de 1996, dejó en claro que los obligados al pago de salarios, prestaciones y pensiones deben asumir, además del cubrimiento íntegro de las sumas correspondientes, la actualización de los valores que hayan venido reteniendo a los trabajadores, desde el momento en que adquirieron el derecho al pago hasta el instante en que éste se produzca efectivamente.

*“Tal actualización, según lo destacó la Sala Plena en Sentencia C-448 de 1996, desarrolla claros principios constitucionales, en especial el que surge del artículo 53 C.P., a cuyo tenor la remuneración laboral debe ser **móvil**, a fin de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, lo que se logra normalmente mediante la indexación de las sumas adeudadas, para que éstas no se deterioren en términos reales con el paso del tiempo, sin detrimento de los cargos que pueda hacerse a la entidad incumplida en cuanto a la indemnización de otros perjuicios que su ineficiencia y demora puedan generar al afectado”*

C.- Con relación al Derecho que tienen los servidores públicos para el reconocimiento y pago de los intereses moratorios, la Corte Constitucional ha indicado:

*“Los demandantes no sólo tienen el derecho a recibir de forma completa y efectiva el pago de sus dineros que por concepto de cesantía parcial les adeuda el Estado, sino que además, dicha suma debe representar un valor actual, que sin reparar en el sistema jurídico que se encuentre vigente en el momento, afecte la capacidad económica y el poder adquisitivo a que tienen derecho. De esta manera, **al no pagarse de forma puntual la prestación requerida por los demandantes, tienen derecho a exigir el pago de los correspondientes intereses por mora que se han generado desde el momento en que tal petición se hizo, hasta la fecha efectiva del pago en cuestión.** Los empleados no pueden sufrir las consecuencias de la negligencia, despilfarro, o problemas económicos en que se encuentre su empleador, y que so pretexto de tal situación, el empleador, sea éste, público o privado, pretenda justificar el no pago de sus obligaciones laborales” (Se resalta)².*

D.- Así mismo manifiesto, que sobre la materia la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han dispuesto que:

La Corte Constitucional en sentencia del 19 de septiembre de 1996, Magistrado Ponente Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO dentro del expediente D-1251 Actor: Hugo Hernán Garzón aclaró:

*“... La cesantía constituye una forma de remuneración laboral, por lo cual los trabajadores tienen derecho a que estas no pierdan su valor adquisitivo, debido a la ineficacia de las entidades pagadoras y a los fenómenos inflacionarios. **La sanción moratoria impuesta por la ley, busca penalizar económicamente a las entidades que incurran en mora, y por ello su monto es en general superior a la indexación. (...)***

Los trabajadores no tiene por que soportar la pérdida del poder adquisitivo de sus prestaciones y remuneraciones laborales, por lo cual los patronos públicos y privados que incurran en mora, están obligados a actualizar el valor de tales prestaciones y remuneraciones.” (Subrayo y negrillas fuera de texto).

E.- Conteo del término para pagarla. Acto administrativo de reconocimiento de cesantías, el **CONSEJO DE ESTADO** ha manifestado



“... el tiempo a partir del cual comienza a correr el término para que se genere la indemnización moratoria debe contarse desde la fecha en la cual el interesado radicó la petición de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, es decir, quince (15) días hábiles que tiene la entidad para expedir la resolución, más cinco (5) días hábiles que corresponden a la ejecutoria, en el evento de que la resolución de reconocimiento hubiere sido expedida, con la salvedad a que alude el mismo precepto, más cuarenta y cinco (45) días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución, para un **total de 65 días hábiles, transcurridos los cuales se causará la sanción moratoria.**

Para la Sala resulta claro que ante la ausencia de pronunciamiento sobre la liquidación de las cesantías definitivas deben contarse los términos en la forma indicada para que la norma tenga efecto útil y hacer efectiva la capacidad conminatoria de la sanción prevista por la Ley, pues, de no acudir a este medio, el cometido proteccionista de los derechos del servidor público que animó a la ley, se vería, paradójicamente, burlado por la propia ley dado que la administración simplemente se abstendría de proferir la resolución de reconocimiento de las cesantías definitivas para no poner en marcha el término para contabilizar la sanción, produciéndose un efecto perverso con una medida instituida para proteger al ex servidor público cesante”.

Por todo lo citado, se solicita el reconocimiento y pago de la **indexación desde la fecha de radicación de la solicitud, hasta la fecha en que se expidió la resolución**, y luego, los **intereses moratorios**, desde la fecha en que se expidió y notificó la resolución, hasta la fecha del pago de las cesantías.

Respecto a la actuación del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TULUA me permito traer a colación la Sentencia de unificación proferida por la Sala plena de la Honorable Corte Constitucional, SU 014 del 23 de Enero de 2002, M.P. Alvaro Tafur Galvis, que indico:

“A través de las diferentes soluciones dadas por las Salas de Revisión, la Corte no ha dado tratamiento uniforme a la función que le corresponde asumir a la Fiduciaria La Previsora con miras a garantizar el derecho de petición de los docentes servidores públicos, dentro del procedimiento administrativo de reconocimiento y pago de sus prestaciones, emitiendo ordenes que no consultan cabalmente el marco normativo regulador de su actuación. No exime a la Fiduciaria de su deber de limitarse a cumplir con su obligación de poner un visto bueno a la liquidación y devolver los expedientes a la oficina coordinadora del Fondo, porque, como ella misma lo ha reconocido, solo tiene obligaciones de medio y, si nada le compete respecto de la emisión del acto administrativo en curso, no le es permitido impedir que éste sea dictado. Además, es preciso recordar a la Fiduciaria en cita que no solo el contrato que tiene suscrito con el Fondo rige sus relaciones con éste, porque conforme lo ordena el artículo 4º constitucional, está obligada a sujetar sus actuaciones prima facie a la Constitución Política, la cual, entre otras obligaciones, le impone respetar los derechos de los terceros, para el presente caso, los de los servidores públicos que demandan el pago de sus cesantías parciales. Igualmente, si bien es cierto que el Ordenamiento Superior prevé la posibilidad de que los particulares desempeñen funciones públicas – arts. 123, 210 y 365 C.P.- también lo es que en el ejercicio de las mismas están limitados por la Constitución y la ley –idem-. La Corte confirmará las providencias que se revisan, como quiera que el derecho de los petentes no puede ser satisfecho por la Fiduciaria la Previsora dada su condición de particular - como quedó dicho -, pero se concederá la protección invocada, pues el Ministerio de Educación Nacional, por intermedio de la oficina correspondiente debe proceder, con la mayor brevedad, a proferir los actos administrativos pendientes de expedición.

Corresponde reiterar que la Fiduciaria La Previsora S.A., es una sociedad de economía mixta, regida por el derecho privado, que, en principio, no puede ser sujeto pasivo del derecho de petición, porque su obligación de administrar los recursos del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y en consecuencia efectuar los desembolsos correspondientes a las prestaciones de los docentes, con base en la previa determinación de aquel no le imprime carácter de autoridad pública.

Para la Corte no es de recibo que los jueces de instancia no hubieran protegido el derecho de petición, donde los demandantes, pese a haber dirigido equivocadamente su demanda, demostraron haber iniciado los trámites ante la oficina Coordinadora del Fondo de Prestaciones del Magisterio y ésta última no demostró haber emitido el acto que le correspondía expedir.



ARTICULO 102 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte de las autoridades.

En cuanto a la caducidad de la acción en sala Plena el Consejo de Estado el 04 de agosto de 2010 con ponencia del Dr. Gerardo Arenas Monsalve, dentro del proceso promovido por la señora ROSMIRA VILLESICA DE SANCHEZ contra la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, con referencia No. 25000-23-25-000-2005-05159-01(0230-08), estipuló:

“...De esta manera la Sala se aparta del criterio acogido en algunas decisiones en las que se ha aceptado la configuración de la caducidad que conduce a proferir fallo inhibitorio frente a la pretensión de reliquidación del auxilio de cesantía, porque se insiste, la exigibilidad tuvo lugar con plena ceteza a partir de la expedición de las sentencias a que se ha venido haciendo referencia...”

De igual manera el Consejo de Estado con ponencia del Doctor GERARDO ARENAS MONSALVE el 02 de septiembre de 2010 dentro del proceso promovido por la señora Hilda Isabel Lubo Gutiérrez contra el Departamento de la Guajira, con referencia No. 440012331000200400088-01 estipulo lo siguiente:

*“...los derechos prestacionales derivados de una relación laboral pueden reclamarse durante un lapso igual a tres años contados desde la fecha en que se hicieron exigibles al tenor de lo dispuesto en los artículos 151 del Código Procesal del Trabajo y de la S.S. y 41 de Decreto – Ley 3135 de 1968. **Esta regla resulta aplicable igualmente a los derechos accesorios de las prestaciones sociales como es el caso de la sanción por el no pago oportuno de las cesantías...**”*
(Subrayado fuera de texto). Anexo copia de la Sentencia.

PRUEBAS Y ANEXOS

Como tales, presento con esta demanda, los siguientes:

a.- Documentales:

1. Copia de la cedula de ciudadanía de mi mandante.
2. Copia de la Resolución que reconoce la cesantías.
3. Copia del comprobante de pago de las cesantías del Banco.
4. Copia de la solicitud de reconocimiento de sanción moratoria.
5. requisito de procedibilidad.
6. Poder debidamente diligenciado.

ANEXOS

Copias de la demanda y sus anexos, para sus correspondientes traslados a la entidad demandada, Ministerio Público, copia para el archivo del Despacho y para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación.

AGOTAMIENTO DE LA VÍA GUBERNATIVA - PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD.

En lo relativo al presupuesto procesal de la acción contenciosa administrativa, como lo es el agotamiento previo de la vía gubernativa, debe observarse que la misma se encuentra agotada en debida forma, aunado al hecho al trámite del agotamiento de la conciliación extrajudicial, a lo que la Procuraduría 60 JUDICIAL I Para Asuntos Administrativos, expide la constancia respectiva, en donde se expresa que se da por fallida la diligencia y agotado el requisito.

Siendo ello así, es dable entrar a reclamar la declaratoria de Nulidad de la Resolución demandada y su consecuencial Restablecimiento del Derecho, toda vez que ha quebrantado el ordenamiento Administrativo, que amparaba una situación jurídica subjetivo.

COMPETENCIA Y CUANTÍA

Es Usted competente Señor Juez, para conocer de la presente demanda, por la naturaleza del proceso, por el lugar de prestación del servicio como docente y por la cuantía que la estimo superior a la suma de



Av. Calle 19 No 3 – 50 Oficina 2202 Edificio Barichara Tel. 3375605 / 3520788 – Bogotá D.C.

[SANCION MORATORIA- CESANTIAS](#)

(\$11.687.510) ONCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M./CTE., a la fecha de presentación de la presente demanda, que corresponde a 122 días de mora por un valor de \$ 95799 pesos diarios.

a.- Salario Base de Liquidación	\$ 2873978
b.- Valor Diario	\$ 95799
122*95799 = (\$11.687.510) ONCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS	

PETICIÓN PREVIA

De conformidad con lo preceptuado y si el señor Honorable Juez estimare que los actos enjuiciados y allegados al proceso no prestaren el suficiente mérito probatorio, ruego, que antes de ser admitida la demanda se disponga por la Secretaría de esa Honorable Corporación oficiar a NACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TULUA, para que alleguen copias auténticas de los Actos Acusados por ella proferida con nota de notificación y ejecutoria.

NOTIFICACIONES

Las demandadas:

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TULUA podrá ser notificado en la CARRERA 25 NO 25-04 EN LA CIUDAD DE TULUÁ VALLE DEL CAUCA y al correo electrónico secduccion@tulua.gov.co.

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, podrá ser notificada en la Calle 43 N° 57-14 CAN de la ciudad de Bogotá.

La Fiduprevisora S.A., puede ser notificada en la Calle 72 No. 10-03 Piso 4 y 5 de la ciudad de Bogotá y al correo electrónico servicioalcliente@fiduprevisora.com.co.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación en la carrera 7 No. 75-66 piso 2 y 3 y al correo electrónico procesos@defensajuridica.gov.co.

El Poderdante y el suscrito puede ser notificado en mi oficina profesional de Abogado ubicada en la Calle 19 No. 3-50 Of. 2202, de Bogotá D.C y al correo electrónico albertocardenasabogados@yahoo.com.

Cordialmente,

ALBERTO CÁRDENAS D
C.C 11.299.893 de Girardot
T.P 50.746 del Consejo Superior de la Judicatura.